

Santiago, cuatro de mayo de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos autos Rol 479-2011, del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, seguidos para esclarecer la muerte de Sergio Osmán Negrete Castillo, por sentencia de nueve de enero de dos mil diecinueve, escrita fojas 2.224 y siguientes, pronunciada por el Ministro en Visita Extraordinaria Sr. Mario Carroza Espinosa, se absolvió a los acusados Luis Daniel Sasmay Auba y Guillermo Enrique González Monsalve del cargo formulado en contra de ambos, de ser autores del delito de homicidio calificado de Sergio Osmán Negrete Barrera, perpetrado en Santiago el 17 de noviembre de 1973.

El mismo fallo condenó a Carlos Patricio Chacón Guerrero, en calidad de autor del referido ilícito, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias legales y al pago de las costas de la causa. Asimismo, se condenó a Carlos Hernán Carreño Barrera, en calidad de cómplice del referido ilícito, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, a las accesorias legales y al pago de las costas. En el acápite civil, el fallo condenó al Fisco de Chile al pago de una indemnización por concepto de daño moral a la hermana de la víctima.

Impugnada dicha decisión por la vía de sendos recursos de casación en la forma y apelación, la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de dieciocho de marzo de dos mil veinte, escrita a fojas 2.551 y siguientes, la revocó, en cuanto condenó a Carlos Hernán Carreño Barrera en calidad de cómplice del delito investigado y, en su lugar, lo absolvió del cargo formulado en su contra, tanto en la acusación fiscal, como en las acusaciones particulares. Asimismo, revocó el fallo *a quo*, en el aspecto civil, rechazando la acción civil intentada contra el Fisco de Chile. Finalmente, se confirmó la



decisión de primer grado, recalificando el ilícito establecido a homicidio simple, con declaración que Carlos Patricio Chacón Guerrero queda condenado a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo como autor del mismo, otorgándosele el beneficio de libertad vigilada.

Contra este último fallo, la defensa de Chacón Guerrero y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, recurrieron de casación, tanto en la forma como en el fondo, según se lee a fojas 2.561 y 2.591, respetivamente. Asimismo, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recurrió de casación en el fondo, según presentación de fojas 2.580.

Por dictamen de 12 de mayo de 2020 se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, la defensa de Chacón Guerrero, según obra a fojas 2.561 dedujo sendos recursos de casación en la forma y en el fondo, contra el fallo de segundo grado.

La casación formal se sustenta en la causal contenida en el artículo 541, N° 9 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 500, N° 4 del mismo cuerpo legal y, a su vez, a los artículos 15 y 391 del código de castigo, denunciando que el fallo carece de las consideraciones en cuya virtud se dio por probada la orden —anterior o coetánea— en cuanto a que el sentenciado habría dispuesto a los subalférez para disparar a la víctima, ni tampoco contiene las consideraciones en cuya virtud se dio por probada la orden —anterior o coetánea— en cuanto a que estos disparasen a matar a la víctima. Explica que, la única orden que recibieron los subalférez, por parte de los tenientes a cargo del operativo, fue que las personas que se encontraban al



interior el recinto educacional, en ese momento, permaneciesen en el patio hasta el término del allanamiento, pero no otra distinta.

Afirma que la sentencia sólo se refiere al mando de la Compañía militar, omitiendo el aspecto más fundamental para demostrar alguna responsabilidad —en atención a la dinámica de los hechos— cuál fue la orden previa o coetánea para disparar, o disparar a matar, a la víctima.

Asimismo, estima que el fallo carece de las consideraciones en cuya virtud se dio por probado que, su defendido, se encontraba físicamente en el lugar exacto en dónde se produjo la custodia de los detenidos, la huida de la víctima y al momento del disparo, es decir, en el patio de custodia y el momento en que los subalférez deciden disparar. No se ha acreditado su presencia en el lugar al momento de la ejecución de los disparos, por lo que solicita invalidar la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que lo absuelva del cargo formulado en su contra.

En cuanto a la casación sustancial, ella se funda en la causal contenida en el artículo 546, N° 7 del código adjetivo, esto es, haberse violado las leyes reguladoras de la prueba con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo. Estima que, el hecho base sobre el cual el sentenciador concluye la existencia de una presunción judicial, no resulta ajustado a la realidad, pues no fue probado ni se fundó en antecedentes múltiples, vulnerando lo dispuesto el artículo 488, numerales 1° y 2° del mismo cuerpo legal, cuestión que impediría presumir alguna responsabilidad en calidad de autor del delito investigado.

Afirma que, de acuerdo a las declaraciones, en especial la del coencausado Carreño Barrera, se estableció de forma categórica que a los subalférez jamás se les ordenó disparar; que Chacón Guerrero llegó, luego de los disparos y vio a un joven fallecido, llamando por teléfono a la Escuela Militar



para dar cuenta de los hechos y recibir instrucciones. Lo anterior demuestra que la conclusión que obtuvo el sentenciador, mediante una presunción judicial, se basa en un hecho que no fue real y que no está probado. El segundo hecho, en cuanto a la declaración del encausado Sasmay Auba, se señaló expresamente que jamás recibió la orden de disparar o de disparar a matar si ocurriese una situación como la que se desarrolló en el lugar, por lo tanto, tal declaración no guarda relación con lo atribuido. Tampoco está acreditado que se haya ordenado a los oficiales o subalférez disparar o disparar a matar. El tercero corresponde a la declaración del encausado absuelto González Monsalve, quien no señala que Chacón Guerrero le habría ordenado disparar, sino que responsabiliza a otro oficial, testimonio que resulta poco fidedigno puesto que los hechos ocurrieron en otro lugar, señalando que nunca estuvo en el Liceo Darío Salas y que, una vez que le dispara a la víctima, una agrupación de Carabineros estaba en el lugar y tomaron el cuerpo. Sin embargo, tampoco señaló que fue Chacón Guerrero quien ordena disparar, por lo que no está acreditado lo establecido en el fallo, lo mismo que otras declaraciones que refiere y los otros elementos de cargo, debiendo descartar cualquier orden de disparar y, por lo tanto, no se verifica la acreditación de los hechos atribuidos a su defendido, siendo posible concluir únicamente su inocencia. En razón de lo anterior solicita invalidar el fallo y dictar sentencia de reemplazo que lo absuelva del cargo formulado en su contra por falta de participación.

Segundo: Que, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos también recurrió de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia pronunciada por el sentenciador *ad quem*. La casación formal se construye sobre la causal contenida en el artículo 541, N° 9 del Código de Procedimiento



Penal, denunciando una falta de análisis probatorio, toda vez que la sentencia de segunda instancia estima que el elemento subjetivo resulta esencial en la calificación jurídica del obrar sobre seguro, para poder calificar el hecho establecido como homicidio calificado, bajo la circunstancia de la alevosía, criterio que dicha parte comparte pero, no obstante, en la motivación siguiente el tribunal descartó la presencia del elemento subjetivo, sin expresar las razones probatorias para ello.

Expone que, de la prueba rendida en autos, se advierte que los hechores aprovecharon las circunstancias objetivas de indefensión que el mismo fallo reconoce, conociendo de las mismas y abusando de ellas, pues de lo contrario, no habrían realizado la conducta que se les imputa. Los autores realizaron la acción, precisamente, por obrar en conjunto a un número considerable de personas, armados, contra civiles desarmados, el contexto histórico nacional que seguiría a la época y, en el caso se observó que se disparó una ráfaga de proyectiles.

Afirma que, además de establecer el elemento subjetivo del actuar sobre seguro, las condiciones en cuestión pueden y deben ser consideradas para calificar al hecho como homicidio calificado, sin perjuicio que, además, este homicidio calificado sea un crimen de lesa humanidad, pues ambas calificaciones se basan en elementos diferentes que concurren en este caso.

Asimismo refiere que existen contradicciones en el fallo de primer grado, pues el sentenciador *a quo* incurrió en una contradicción evidente pues, en primera instancia reconoce que los acusados Sasmay Auba y González Monsalve participaron del procedimiento que terminó con el homicidio de la víctima, y que González Monsalve reconoció haber efectuado una ráfaga de disparos, decidiendo absolverlo pues dichos disparos no habrían tenido la



aptitud de ser eficaces a la hora de dar en el blanco apuntado. Respecto de Sasmay Auba, da cuenta de la participación del acusado en el procedimiento y eso al menos sería suficiente para tenerlo como cómplice del delito pues cooperó con los hechores y por lo tanto ahí está dada la contradicción evidente, por lo que solicita invalidar la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que condene a Chacón Guerrero a la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo; a Sasmay Auba a la pena de quince años de presidio mayor en su grado medio como cómplice; misma pena que solicita en contra de González, como autor del delito en grado desarrollo frustrado.

En cuanto al recurso de casación en el fondo, se funda en las causales contenidas en el artículo 546, numerales 7º y 1º del código adjetivo. Respecto de la primera, denuncia una vulneración de las normas reguladoras de la prueba, las cuales, de no infringirse habría permitido —en su concepto— acreditar la responsabilidad de los acusados absueltos como autores del delito investigado de homicidio calificado. Respecto de la segunda causal, en cuanto a la participación atribuida a los acusados y la calificación de circunstancias modificatorias de responsabilidad, que permitió la absolución, en algunos casos, y la disminución de la pena aplicable a Chacón Guerrero.

En lo que respecta la primera causal, refiere que existen diversas presunciones. En primer lugar, tanto Sasmay Auba como González Monsalve participaron del procedimiento en calidad de subalférez, correspondiéndoles la custodia de los civiles detenidos en el establecimiento educacional. González Monsalve descargó una ráfaga de proyectiles en contra de la víctima. Del mismo modo, Carreño Barrera era el segundo al mando, siendo quien trasladó cuerpo sin vida de la víctima, el mismo día de la muerte, hasta el Instituto Médico Legal.



Explica que, lo anterior, configura el error en el cual incurrió el sentenciador, al no considerar dichas presunciones como fundamento para una sentencia condenatoria en contra de los acusados. Respecto de Carreño Barrera, el sentenciador cometió un segundo error al ni siquiera atribuirle participación a título de cómplice, ya que no sólo participó coetáneamente en los hechos sino que, además, responde por el mando que ejercía en circunstancias que pudo evitar el hecho no lo hizo y puede ser imputado como autor bajo la teoría del dominio de la organización.

Respecto de la segunda causal, denuncia una falsa aplicación de los artículos 68 bis y 63 del código de castigo, al reconocer en favor de Chacón Guerrero la circunstancia minorante de responsabilidad penal de irreproachable conducta anterior, teniéndola como muy calificada.

Solicita invalidar la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que condene a los acusados, Sasmay Auba como cómplice y a González Monsalve como autor del delito de homicidio frustrado, se imponga a Chacón Guerrero la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo, misma pena que solicita respecto de Carreño Barrera.

Tercero: Que, la Unidad Programa de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recurrió de casación en el fondo, contra la sentencia de segunda instancia, fundando su arbitrio, en primer lugar, en la causal contenida en el artículo 546, N° 1 del código de enjuiciamiento criminal, en relación con el artículo 16 del Código Penal, debiendo calificar la participación del acusado Carreño Barrera en los hechos materia de la acusación en calidad de cómplice, y también respecto de la absolución de los acusados Sasmay Auba y González Monsalve.



Sin embargo, en estrado, la abogada que compareció en representación de la recurrente, renunció expresamente a la primera causal deducida, manteniendo únicamente el recurso por la causal segunda del arbitrio interpuesto.

En razón de lo anterior, la única causal vigente es la contenida en el artículo 546, N° 7 del Código de Procedimiento Penal, por haberse violado las leyes reguladoras de la prueba al no considerar a Sasmay Auba y a Gonzalez Monsalve como autores del delito, y a Carreño Barrera como cómplice, vulnerándose lo dispuesto en el artículo 488, N° 1 del código adjetivo, en relación con los artículos 485, 221 y 471 del mismo cuerpo legal.

Respecto de Sasmay Auba, se omite que se determinó en los hechos que realizó disparos, ya que los testigos presenciales lo reconocen en sus declaraciones, quienes escucharon más de un tiro, de tal forma que sólo uno produjo la muerte de la víctima, pero no fue el único que se realizó, pues no se tiene certeza de cuántos disparos fueron efectuados y, al no realizarse ningún informe en la investigación por su muerte, pues en el colegio había varios casquillos de balas como refirieron los testigos. Además, existen otras declaraciones que le perjudican como la del coacusado González Monsalve y las probanzas consignadas permiten tener por acreditado los hechos en la forma propuesta por dicha parte acusadora, respecto de los encartados Sasmay Auba y González Monsalve en cuanto a que realizaron el hecho delictivo, contribuyendo a su ejecución de manera equivalente y su conducta causó la lesión que provocó la muerte, no existiendo reproche por parte de sus superiores, existiendo una participación conjunta y, por lo tanto, sin sus actos el delito no se hubiese materializado.



Además, refiere que los antecedentes resultan insuficientes para tener por acreditada la circunstancia atenuante muy calificada de Chacón Guerrero, en los términos explicados en la sentencia lo que, por tanto, influye en lo dispositivo del fallo.

Por todo lo anterior, solicita invalidar la sentencia y se condene a los acusados, a Chacón Guerrero a la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo, a Sasmay Auba y a González Monsalve a la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo y a Carreño Barrera como cómplice del delito de homicidio a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo.

Cuarto: Que, como se consigna en el motivo octavo de la sentencia de primer grado, mantenido casi íntegramente en el fallo de segunda instancia, los sentenciadores del fondo tuvieron por demostrados los siguientes hechos:

“1.- Que, en horas de la tarde del día sábado 17 de noviembre de 1973, efectivos de la 5ª Compañía del Batallón Curso Militar de la Escuela a cargo del Capitán Carlos Chacón Guerrero, se constituyen en dependencias del Liceo Darío Salas ubicado en calle Avenida España de la comuna de Santiago, a fin de realizar un allanamiento destinado a ‘ubicación de armas al interior del recinto’;

2.- Que durante el desarrollo del operativo militar, a los civiles que se encontraban en el interior del establecimiento escolar, se les mantuvo en calidad de detenidos en un sector del local, custodiados por efectivos militares, pero antes de su término, uno de ellos, Sergio Osmán Negrete Castillo, decide huir y corre hacia una de las pandereta divisorias, que colindan con otros inmuebles;



3.- Que el personal militar al ver la acción del joven, le da la orden de detenerse, pero éste no la acata y sigue su carrera, ante lo cual los cadetes que se encontraban en el lugar, Luis Daniel Sasmay Auba y Guillermo Enrique González Monsalve, entre otros, en cumplimiento a instrucciones previamente recibidas de sus superiores, le disparan y uno de todos ellos lo hace directamente al cuerpo, en los momentos en que la víctima pretendía traspasar el muro colindante, ocasionándole heridas que le causan la muerte;

4.- Que, en atención a lo sucedido, el Capitán Chacón que se encontraba al mando absoluto del destacamento de subalférez, toma la decisión de culminar con el operativo y le ordena a su segundo en el mando, el Teniente Carlos Hernán Carreña Barrera que el cuerpo sin vida de la víctima, fuera trasladado en uno de los vehículos hasta el Instituto Médico Legal;

5.- Que, a las 17:30 horas del mismo día, es ingresado en el Instituto Médico Legal el cadáver de Sergio Osmán Negrete Castillo, por personal militar a cargo del Teniente Carlos Carreña y según protocolo de autopsia, la causa de su muerte fue una herida de bala abdominotorácica con salida de proyectil, que tuvo un trayecto intra-corporal del proyectil de abajo arriba, izquierda derecha y delante atrás, y que el disparo era de los llamados en medicina legal de ‘corta distancia’.

Estos hechos fueron determinados, en primer instancia, como constitutivos del delito de homicidio calificado en la persona de Sergio Osmán Negrete Castillo, previsto y sancionado en el artículo 391, N° 1 del Código Penal, al haberse asegurado los responsables antes de cometerlo, que de parte de la víctima no habría ninguna reacción defensiva, por lo que actuaron, en su ejecución, con total impunidad.



Los sentenciadores *ad quem* descartaron —en los hechos establecidos— la alevosía, constituida por el obrar a traición o sobre seguro, ya que a su parecer *“el simple azar de circunstancias favorables no es motivo suficiente para considerar más grave un homicidio que otro”*, explicando que la mayor reprochabilidad de la conducta sólo aparece cuando las condiciones de aseguramiento han sido especialmente buscadas o procuradas por el hechor, de tal suerte que el mero aprovechamiento de circunstancias casuales que no se buscaron con el fin de matar no transforma un homicidio en alevoso.

Agregaron que, no obstante es indudable que el sujeto pasivo de la acción se encontraba en una posición efectiva de indefensión, lo cierto es que esas condiciones de aseguramiento no fueron especialmente buscadas o procuradas por el autor —directo o mediato— del ilícito para conseguir una finalidad homicida, ya que la prueba recabada no da cuenta que se haya generado con relativa anterioridad temporal al momento mismo en que se verifica el disparo, de forma que ese simple, como se expresó, “aprovechamiento de circunstancias casuales que no se buscaron”, excluye el actuar sobre seguro en los términos que ha de entenderse lo concibe el legislador. Los antecedentes probatorios, por el contrario, permiten sostener que la detención del ofendido, al interior del establecimiento educacional el día en que se llevó a efecto un allanamiento destinado a la ubicación de armas en el recinto, se debió a un suceso circunstancial, no querido ni previsto.

Sin perjuicio de lo anterior, debe también tenerse en consideración que esas especiales condiciones objetivas de indefensión, en el específico contexto histórico en que tuvieron lugar y que ha sido acertadamente descrito en el fallo de primera instancia, han permitido calificar el delito como de lesa humanidad y



eventualmente sancionar a sus autores, como se dirá, más de cuarenta años después de cometido.

Quinto: Que, en primer lugar se abordará el segundo acápite del recurso de nulidad formal planteado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, en tanto se persigue denunciar una eventual contradicción contenida en el fallo de primer grado. Sobre este punto, para que pueda ser admitido por el vicio invocado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, resulta indispensable que aquel que lo entabla haya reclamado de las faltas, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos por la ley, exigencia a la cual no se dio cumplimiento en la especie, desde que la sentencia impugnada fue confirmatoria —en el acápite impugnado— de la de primera instancia y en contra de esta última la querellante no dedujo el pertinente recurso de nulidad formal. En consecuencia, este capítulo de casación formal no podrá prosperar, por falta de preparación.

Sexto: Que, en lo que respecta al primer capítulo de invalidación formal propuesta por la querellante, lo propugnado no resulta compatible con la naturaleza del recurso de casación en la forma, pues a través del mismo se está cuestionando la calificación jurídica establecida por los sentenciadores *ad quem*, instando por mantener aquella dispuesta en el fallo de primer grado, pero sin atribuir un yerro formal de aquellos que habilitan la casación propuesta. En razón de lo anterior, y siendo lo denunciado materia de una casación sustancial, en los términos del artículo 546, N° 2 del código adjetivo, el recurso no podrá ser acogido.

Séptimo: Que, en relación al recurso de casación en la forma propuesto por la defensa de Chacón Guerrero, conviene dejar en claro que la causal



contenida en el N° 9, del artículo 541 del código adjetivo se configura cuando la resolución no contiene los basamentos en cuya virtud se dan por comprobados o no los hechos atribuidos a los inculcados, o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, eximirse de responsabilidad o atenuar ésta; vale decir, cuando no se desarrollan los razonamientos por los cuales se emite pronunciamiento en relación al asunto sometido a la decisión del tribunal. Por ello, el motivo de invalidación que se alega, tiene un carácter esencialmente objetivo y para pronunciarse acerca de su procedencia basta el examen externo del fallo para comprobar si existen o no los requerimientos que compele la ley (entre otras, SCS N°s 20.616-2018, de 14 de enero de 2021; 33.547-2018, de 23 de agosto de 2021; 28.310-2018, de 21 de septiembre de 2021; y, 33.661-2019, de 25 de junio de 2022).

Octavo: Que no está de más recordar que, la exigencia del legislador respecto de la inclusión de los razonamientos del juez fallador en sus dictámenes cumple el objetivo de evitar arbitrariedades en sus resoluciones, y es a la luz de este pensamiento que se han contemplado las normas relativas a los contenidos de las sentencias y, sobre todo, la sanción a su vulneración a través del artículo 541, N° 9 del Código de Procedimiento Penal, por ser la fundamentación de las sentencias una garantía de la correcta administración de justicia.

Noveno: Que, de un atento estudio de la sentencia impugnada, se constata que ella no adolece de las falencias denunciadas, en los términos acotados en la reflexión anterior, pues en los fundamentos decimotercero y decimonoveno del fallo de primer grado y decimotercero del de segunda instancia se explicitan los razonamientos que le sirven de soporte, estableciendo, luego de analizar diversos elementos, la participación mediata



de Chacón Guerrero en calidad de autor, de conformidad con lo que dispone el artículo 15, numeral 2º del Código Penal, en el delito de homicidio simple en la persona de Sergio Osmán Negrete Castillo.

Décimo: Que, en relación al vicio denunciado, es conveniente recordar que lo que estatuyen las normas que se dicen infringidas por la recurrente, en relación a la forma de extensión de las sentencias, es que el pronunciamiento contenga las reflexiones de hecho que le sirven de apoyo, sobre la base de la discusión planteada en el proceso. De esta manera, no resulta posible admitir la solicitud de nulidad de la sentencia dictada con miras a obtener una nueva estimación de los hechos para obtener una conclusión distinta a la de la instancia, ya que ello escapa a un motivo de nulidad como el presente.

Por lo expuesto y dado que el fallo que se impugna ha cumplido con las exigencias que se denuncian omitidas, lo que se advierte de su examen, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, resulta que los defectos en que descansa la motivación de nulidad del libelo no la conforman, porque no existen, no siendo entonces exactas las transgresiones imputadas al fallo en estudio, desde que más que la ausencia de consideraciones se reprueba la fundamentación de los jueces de la instancia para decidir de la forma en que lo han hecho, por lo que no ha podido configurarse la causal de invalidación formal esgrimida por la defensa de Chacón Guerrero, la que habrá de ser desestimada.

Undécimo: Que, corresponde ahora analizar el recurso de casación sustancial deducido por la defensa de Chacón Guerrero, el cual se sustenta en la causal contenida en el artículo 546, N° 7 del código adjetivo, defendiéndose la infracción del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, norma que establece diversos extremos para que las presunciones judiciales puedan



constituir prueba completa de un hecho, en este caso, de la participación del encartado en el delito objeto de la sentencia.

De dichos extremos, esta Corte ha aclarado que sólo constituyen normas reguladoras de la prueba, que pueden ser revisadas, en sede de casación, la contenida en el ordinal 1°, esto es, que las presunciones judiciales se funden en hechos reales y probados y no en otras presunciones, sean legales o judiciales; y, del ordinal 2°, la exigencia de multiplicidad de ellas. Los demás extremos, esto es, que las presunciones sean graves; precisas, de tal manera que una misma no pueda conducir a conclusiones diversas; directas, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho que de ellas se deduzca; y que las unas concuerden con las otras, de manera que los hechos guarden conexión entre sí, e induzcan todas, sin contraposición alguna, a la misma conclusión de haber existido el hecho de que se trata, no pueden considerarse reglas reguladoras de la prueba, ya que queda entregado a los jueces de la instancia afirmar o negar su cumplimiento como resultado de un ejercicio de ponderación y valoración del conjunto de las presunciones judiciales, cuestión que les es privativa a los sentenciadores del grado y que no puede ser controlado por esta Corte.

Duodécimo: Que, asentado lo anterior, primero conviene precisar, si bien el libelo indica los numerales que considera han sido conculcados, de la lectura del recurso no se demuestra su imputación, pues únicamente cita la disposición para plantear una discrepancia en torno a la valoración que el fallo confiere a los elementos de convicción reunidos y relacionados en la sentencia conforme a los cuales se estimó acreditada la intervención de Chacón Guerrero en los hechos, discordando de sus conclusiones, cuestión ajena a este recurso de naturaleza sustantiva.



Así, en lo que respecta al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, tal como reiteradamente se ha mencionado, es preciso señalar que la invocación genérica del mencionado precepto —pese a precisarse los numerales 1º y 2º— que se han efectuado por el impugnante, atenta contra la calidad de derecho estricto del recurso, lo que impide a este tribunal concluir, con toda precisión, en qué consistieron los errores de derecho y de qué modo influyeron en lo decisorio.

Así, lo ha dicho antes este Tribunal al señalar: *“las exigencias contenidas en los ordinales N° 2 a 5 del artículo 488, para constituir prueba completa, como las relativas a su gravedad, precisión y concordancia, tampoco puede conseguirse por esta vía [recurso de casación], pues demanda juicios y valoraciones que escapan a un control acotado a errores de derecho propio de la casación de fondo”* (entre otras, SCS N°s 32.259-2015, de 23 de diciembre de 2015; y, 8.758-2015 de 22 de septiembre de 2015). En el mismo sentido y, complementando lo anterior, se ha declarado que el artículo 488, en estudio, es norma reguladora de la prueba, *“sólo en cuanto establece una limitación a las facultades de los jueces del fondo para dar por probados los hechos litigiosos a través del uso de presunciones judiciales. Por ello, un correcto y competente examen respecto de esta infracción importa respetar la prohibición que tiene esta Corte de adentrarse en un nuevo análisis de la ponderación realizada por los jueces del grado, pues dicho ámbito escapa al control de esta magistratura, ya que de realizarlo se volvería a examinar y valorar los antecedentes probatorios que ya fueron apreciados, además de revisar las conclusiones a que aquellos arribaron, lo que está vedado, pues desnaturaliza el arbitrio en estudio, el que debe fundarse exclusivamente en asuntos de derecho”* (entre otras, SCS N° 33.997-2016, de 13 de octubre de 2016).



Sin perjuicio de lo expresado, y teniendo en consideración que la presunción judicial es *“la consecuencia que, de hechos conocidos o manifestados en el proceso, deduce el tribunal ya en cuanto a la perpetración de un delito, ya en cuanto a las circunstancias de él, ya en cuanto a su imputabilidad a determinada persona, y entonces sólo puede llegar a configurar prueba completa de un determinado suceso cuando se basa en eventos reales y probados y no en otras presunciones, legales o judiciales, de acuerdo con el artículo 488, N° 1, del reseñado ordenamiento adjetivo”* (Latorre, Graciela. Las presunciones en el proceso penal, memoria de prueba, Editorial Universitaria S.A., 1964, p. 178), los hechos asentados en los motivos decimoctavo a decimonoveno de la sentencia de primer grado, hechos suyos por el fallo en alzada en el fundamento decimotercero, que estableció la participación de Chacón Guerrero a título de autor, emanan de antecedentes que constan en la causa, de manera que las exigencias que la norma citada como conculcada impone han sido satisfechas, toda vez que las referidas conclusiones emanan de los diversos medios de prueba y no de otras inferencias.

Así, el raciocinio que conduce a los sentenciadores del fondo a considerar probados o no tal hecho con esos medios, como se dijo, escapa naturalmente del control del tribunal de casación. En tal sentido, Manuel Egidio Ballesteros expresa: *“nosotros fijamos reglas generales para la manera de estimar la prueba, y consignamos los casos en que debe estimarse bastante para acreditar la existencia de un hecho, pero al mismo tiempo dejamos al juez la libertad de criterio para hacer sus inducciones o deducciones”* (Proyecto de Código de Procedimiento Penal para la República de Chile, Imprenta Cervantes, Santiago de Chile, 1897, nota al artículo 466 [actual 456], pp. 254 y 255).



Decimotercero: Que, de esta manera, entonces, al no haberse demostrado la aplicación errónea de la ley atingente a la causal de infracción a las leyes reguladoras de la prueba, los hechos demostrados en la sentencia, consignados en los motivos referidos del fallo de primer grado, hechos suyos por el fallo en alzada, resultan inamovibles, de los que surge con claridad la intervención de Chacón Guerrero como autor mediato del delito de homicidio simple, determinaciones que no merecen reproche a este Tribunal, de manera que el recurso intentado será desestimado.

Decimocuarto: Que, para efectos prácticos, se analizarán conjuntamente los recursos de casación sustancia propuestos por los querellantes, en tanto se han formulado reproches análogos en ambos casos. En lo que guarda relación con la causal contenida en el artículo 546, N° 1, vigente únicamente en razón de la casación propuesta por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, en primer lugar ella se funda en las decisiones de absolución de los encausados Carreño Barrera, Sasmay Auba y González Monsalve, instando la articulista por su condena. Sin embargo, tal argumentación no resulta coherente con la causal impetrada, en tanto ella no habilita para solicitar la condena de quienes resultaron absueltos. El propio tenor de la disposición en que se apoya la impugnación ratifica este aserto, al expresar que el error de derecho denunciado debe haber conducido a imponer al acusado una pena más o menos grave que la determinada en la ley, de manera que su ámbito no se puede extender a la situación planteada, en la que se impetra una condena en contra de los encausados absueltos.

En lo que respecta al segundo capítulo, dentro de la causal en estudio, la pretensión de la articulista en torno a la calificación de la circunstancia minorante reconocida en favor de Chacón Guerrero, no guarda relación alguna



con la aplicación errónea de la norma contenida en el artículo 68 bis o del artículo 63 del Código Penal, sino que más bien aluden a la ponderación que los jueces del grado —en uso de sus atribuciones privativas al momento de ponderar los antecedentes— hicieron de los criterios que establece dicha disposición, cuestión que no resulta revisable a través de la vía pretendida, por cuanto se trata de una causal de derecho estricto que requiere demostrar un error al momento de la determinación de la circunstancia modificatoria de responsabilidad y su calificación, circunstancia que no ocurre en la especie, pues lo que se cuestiona es la ponderación de los antecedentes, máxime si los argumentos dados por los recurrentes no obedecen a elementos coetáneos a los hechos investigados, razón por la cual la causal en estudio no podrá ser acogida.

En lo que respecta al rechazo de la circunstancia agravante de responsabilidad penal prevista en el artículo 12, N° 8 del código de castigo, el error atribuido por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos no logra demostrarse, puesto que la condición atribuida a Chacón Guerrero, respecto a su condición militar, fue precisamente aquello que el sentenciador del fondo consideró para estar en presencia de un delito de lesa humanidad.

Decimoquinto: Que, en lo referido a la segunda causal de invalidación sustancial postulada por los querellantes, y tal como se analizó *ut supra* al momento de ponderar la causal de casación sustancial propuesta por la defensa de Chacón Guerrero, el raciocinio que conduce a los sentenciadores del fondo a considerar probados o no tal hecho con los medios de convicción, escapa naturalmente del control del tribunal de casación.

Al respecto, en lo referido a Carreño Barrera, se estableció en primer lugar que, el operativo que concluyó con la muerte de la víctima, se encontraba



en términos “absolutos” a cargo del Capitán Chacón Guerrero. Asimismo, lo atribuido en esta investigación penal a Carreño Barrera no fue responsabilidad por el mando, sino por el hecho de haber trasladado —por orden del Capitán Chacón—, el mismo día de la muerte de Sergio Osmán Negrete Castillo, a las 17:30 horas, su cuerpo sin vida hasta el Instituto Médico Legal, lugar en que conforme a los antecedentes que obran en autos, dicho inculpado se individualizó pública y formalmente.

Es en razón de la dinámica descrita que, la sentencia impugnada, descarta la participación atribuida a su respecto a título de cómplice, puesto que su actuar fue posterior a los hechos y constituyó una acción atípica penalmente. Sobre ese razonamiento, la causal de invalidación propuesta no resulta idónea para desvirtuar tal razonamiento, pues no se han atribuido hechos diversos de aquellos asentados por los sentenciadores del fondo.

Decimosexto: Que, en lo que respecta a la causal en estudio, engarzada con lo reprochado por los articulistas y atribuido respecto de Sasmay Auba y González Monsalve, huelga recordar que, en gran parte, los hechos postulados por los recurrentes resultaron asentados por los sentenciadores del fondo. En lo que respecta al primero de los nombrados, el motivo vigesimotercero del fallo de primer grado, decide su absolución sobre la base de la existencia de una *“duda razonable acerca de su seria participación en estos hechos”*, careciéndose de una prueba directa a su respecto y, por consiguiente, el tribunal no logró *“adquirir certeza necesaria de su intervención culpable y solo admite una inferencia razonable que permitió en su momento formularle dicha imputación, pero esta prueba hoy resulta insuficiente para condenarle”*. Respecto del segundo, la motivación vigesimocuarta del fallo *a quo* no alcanzó *“la convicción forzosa de haber sido él quien con sus disparos*



le causara la muerte, conforme se aprecia de los antecedentes del proceso, particularmente de los informes periciales”, para en el fundamento siguiente concluir que, los el mérito de los antecedentes impidió “adquirir convicción acerca de su participación material en el delito, existe en este caso por lo ya señalado una duda razonable”.

Por lo anterior, la causal en estudio resulta inidónea para alterar la decisión de absolución de los sentenciados, pues respecto a Sasmay Auba y González Monsalve las presunciones reclamadas por los articulistas fueron — en lo medular— atendidas por los sentenciadores del fondo, en tanto que, la decisión impugnada obedeció únicamente al mandato contenido en el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, razón por la cual los arbitrios serán desestimados.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 541, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, **se rechazan** los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por la defensa del sentenciado Carlos Patricio Chacón Guerrero y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, y el recurso de casación en el fondo, propuesto por la Unidad Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, de dieciocho de marzo de dos mil veinte, y que obra a fojas 2.551 y siguientes, la que por consiguiente, **no es nula**.

Se previene que el Ministro Sr. Brito, concurre al rechazo del recurso de casación en el fondo propuesto por la defensa de Chacón Guerrero teniendo presente, además, que la responsabilidad del sentenciado deriva del hecho indiscutido de haber proveído fusiles automáticos a cadetes en procesos de formación. Sin lugar a dudas tal entrega importa también la



autorización para su uso, de suerte que, tratándose de un oficial de armas no es posible sino que responsabilizarlo por estos hechos.

Regístrese y devuélvase con sus tomos y agregados.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Brito.

N° 43.973-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y la Ministra Sra. María Teresa Letelier R. No firman el Ministro Sr. Brito y la Ministra Sra. Letelier, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ambos con licencia médica.



Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a cuatro de mayo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

